

**ORDEN**

En uso de las atribuciones que me ha sido conferidas por las disposiciones vigentes, y a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante la aparición del brote de COVID-19 a finales del año 2019 en China, con un rápido avance del número de contagios que obligaron a sus autoridades a adoptar drásticas medidas, y, posteriormente múltiples réplicas en otros países, también con una rápida propagación, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia internacional con el ánimo de paliar su rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional.

SEGUNDO.- En el ámbito educativo, al identificarse como potencial foco de propagación del virus los centros educativos, la Comunidad de Madrid publicó la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) donde se establece para el ámbito docente *“La suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.”*

TERCERO.- Ante el progresivo avance de contagios, que se extiende a toda España y amenaza con colapsar el sistema sanitario en nacional, se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real decreto, entre otras medidas, extiende la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, manteniendo las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y "online", siempre que resulte posible.

Ante la persistencia de la pandemia el estado de alarma se ha visto prorrogado en sucesivas ocasiones hasta las 0.00 horas del día 21 de junio de 2020, según dispone el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

CUARTO.- Durante la vigencia del estado de alarma establecido mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo como consecuencia de la pandemia del COVI-19 se dictan en España todo un cuerpo normativo para combatir su propagación y





Comunidad de Madrid

amortiguar sus impactos, entre los que se encuentra el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que en su artículo 16 de Medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas, establece que:

1. *La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.*
2. *De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.*
3. *El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a justificar.*

QUINTO.- Una vez finalizado el estado de alarma, y ante la necesidad de coexistir con el virus que puede dar lugar rápidamente a nuevos brotes se publicó el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En el ámbito educativo, el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que "*Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.*"

SEXTO.- Con el inicio del periodo estival y la vuelta a la nueva normalidad tras el estado de alarma se han detectado el repunte del número de contagios y focos y se han tenido que adoptar medidas de contención que eviten una nueva escalada. En el caso de la Comunidad de Madrid, ante el riesgo de que puedan surgir nuevos y múltiples brotes, como en otras Comunidades Autónomas, se ha publicado la Orden 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.





Comunidad de Madrid

SÉPTIMO.- El inicio del nuevo curso escolar 2020/2021 de forma escalonada que previsiblemente empezaría con las primeras incorporaciones ya el 4 de septiembre de 2020 va a suponer el regreso a las aulas del alumnado de forma presencial y por lo que urge adoptar medidas de prevención mediante la detección de los portadores de la enfermedad antes de que se produzcan los contagios.

La capacidad de contagio del virus se da con carácter previo a la aparición de síntomas del transmisor siendo los habituales: fiebre, tos seca y cansancio, frente a otros síntomas menos comunes como molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, pérdida del gusto y olfato y otros.

Son precisamente los síntomas, los que en primera instancia pueden delatar la existencia de personas contagiadas por COVID-19, por lo que, en entornos con múltiple movimiento de personas, la toma de temperatura corporal se ha determinado como instrumento útil de detección y contención de la transmisión de contagios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presente orden se emite en ejercicio de las competencias atribuidas por Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y en aplicación por la Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desconcentran y delegan determinadas competencias en los titulares de diferentes centros directivos de la Consejería.

SEGUNDO.- El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que:

"1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

(. . .)





Comunidad de Madrid

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.(. ..)”

En el caso planteado del COVID-19, con efectos que lejos de remitir, parecen rebrotar en múltiples puntos, requiere de actuaciones contundentes que eviten una situación como la vivida en los meses precedentes y que dieron lugar a la declaración del estado de alarma y que se hacen especialmente urgentes por el grave peligro de contagio que implica el inicio del curso escolar el 7 de septiembre de 2020 sin las medidas de prevención adecuadas. La situación resulta especialmente grave, no solo por la naturaleza o población afectada, sino también por su distribución territorial.

La red educativa formada por más de 1.500 centros puede convertirse en un foco de propagación, múltiple y distribuido, que haga nuevamente descontrolada la situación de la pandemia con el grave peligro que esta supone para la población, por ello resulta una situación de emergencia la urgente disposición de medios para la detección precoz de los casos portadores del virus y evitar que los centros sean foco de contagio a través de la aparición de los síntomas más comunes. Entre estos medios de detección inmediata estarían los termómetros sin contacto.

La asociación de los efectos del COVID y la necesidad de hacer uso de medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas para combatirlo ya quedó puesta de manifiesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que establecía que *“La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”* lo que conducía a que de forma inequívoca *“todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia”*

En consecuencia, la adquisición de termómetros sin contacto para su distribución en los distintos centros educativos de titularidad de la Consejería de Educación y Juventud, se encontraría justificada por su carácter de necesarias para evitar un riesgo grave para la salud según lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y en consecuencia susceptibles de su contratación sujeta a su tramitación de emergencia.

Por lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 1.2 b) de la Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, y de la facultad prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público,

Consecuentemente con lo expuesto,





Comunidad de Madrid

DISPONGO

PRIMERO.- La declaración de emergencia del contrato de suministro de 3.100 termómetros digitales sin contacto para distribución en la red educativa de la Comunidad de Madrid como medida de prevención contra el COVID-19.

SEGUNDO.- Ordenar que se ejecute lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida; así como efectuar la oportuna retención de crédito por un importe de 70.368,76 €.

TERCERO.- Comunicar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el presente Acuerdo en el plazo máximo de treinta días.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
(P.D Orden 11634/2012 de 27 de noviembre BOCM 3-12)
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

Fdo.: Ignacio García Rodríguez

